

1. Los límites del modelo neoliberal y los retos de la democracia en América Latina

*Yadira Gálvez Salvador**

Introducción

A prácticamente dos décadas de las transiciones a la democracia y de la implementación de las medidas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el panorama latinoamericano continúa siendo sombrío. Lejos de haberse cumplido las metas de consolidación democrática, fortalecimiento institucional y desarrollo económico que acompañarían al binomio democracia-neoliberalismo, las sociedades latinoamericanas se caracterizan por un mayor grado de exclusión, pobreza, clientelismo, violencia, hambre, desempleo, descrédito de los partidos políticos tradicionales y debilidad institucional, entre otros.

Sin duda, la convergencia del modelo económico neoliberal con la corrupción de las clases políticas latinoamericanas tienen al borde de la crisis a nuestros países, cuyas sociedades oscilan entre el desconcierto, la desesperanza y la búsqueda de nuevas opciones para enfrentar la crisis.

El desencanto con las instituciones democráticas y con las políticas económicas se ha reflejado de diversas formas: desde la formación de poderosos movimientos sociales (como los *piqueteros* en Argentina, los *sin tierra* en Brasil y los *cocaleros* en Bolivia) hasta la elección de presidentes con un corte claramente autoritario como Hugo Chávez en Venezuela, pasando por los líderes de derecha como Felipe Calderón Hinojosa en México y Álvaro Uribe en Colombia hasta llegar a lo que

* Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, con estudios de Maestría en la misma institución. Profesora de Asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. y Secretaria de Actividades Académicas de la Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, A.C.

representa el resurgimiento de la izquierda con los gobiernos de Lula Da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Néstor Kirchner en un momento, y actualmente Cristina Fernández, ambos en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Tabaré Vázquez en Uruguay. Una izquierda que, acotada por el entorno internacional y por las características del desarrollo capitalista de sus respectivos países, tiene un estrecho margen de maniobra para plantear transformaciones profundas al modelo económico, pero que se compromete con la política social favorable a las mayorías.

El objetivo de este ensayo es realizar una serie de reflexiones en torno a la crisis del modelo neoliberal en la región latinoamericana y los retos para la consolidación democrática en nuestros países.

Neoliberalismo y crisis social

A lo largo de su historia, el capitalismo latinoamericano ha sido dirigido por una élite moldeada en los vicios y en la incapacidad de la vieja oligarquía terrateniente y de la burguesía comercial y financiera, a la cual se integraría el sector industrial. Lejos de poder conformar una nación moderna, con un mercado integrado, una industria competitiva basada en altos niveles de productividad y tecnológicos, esta élite se ha orientado desde siempre a la ganancia extraordinaria y fácil.

Desde su conformación como Estados Nación, los países latinoamericanos se caracterizaron por la conjunción del poder político y económico en élites que mantenían una relación de dependencia y subordinación con los centros capitalistas. Esta es una característica que persiste en nuestras naciones: los intereses de la clase dirigente responden directamente a los de los grupos económicamente poderosos, si no es que existe una yuxtaposición entre éstos y, al mismo tiempo, se ligan directamente a los intereses externos en una relación de subordinación. En consecuencia, el “interés nacional” es definido en función de las prioridades de una élite, que además de ser corrupta, responde a su interés de clase y no al colectivo de una nación.¹

Luego del gran fracaso del modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones² y del colapso económico que significó la crisis de la deuda, los gobiernos de los países latinoamericanos asumieron abiertamente los postulados de la economía neoliberal, en el marco de la transformación capitalista mundial. No obstante, como ha señalado James Petras, las raíces del modelo neoliberal las encontramos durante la década de los setenta, con el advenimiento de los regímenes *burocrático autoritarios de contrainsurgencia*³ que permitieron el establecimiento de las bases para el surgimiento y la hegemonía de la nueva clase capitalista transnacional latinoamericana, en alianza con las corporaciones multinacionales de Estados Unidos y Europa.

¹ Marcos Kaplan, *Estado y Sociedad*, UNAM, 1978.

² Entre las razones del fracaso del modelo industrializador vía sustitución de importaciones destaca la incapacidad de las élites económicas latinoamericanas para impulsar procesos que trascendieran la producción de bienes de consumo e incursionaran en los bienes de capital, además de generar nulos procesos de calidad amparadas bajo la protección del Estado. Como señala Fanjnzylber, “la protección amparaba una reproducción indiscriminada pero a escala pequeña, de la industria de los países avanzados, trunca en su componente de bienes de capital, liderada por empresas cuya perspectiva a largo plazo era ajena a las condiciones locales y cuya innovación no sólo se efectuaba principalmente en los países de origen sino que, además, era estrictamente funcional a sus requerimiento”. Ver: Fernando Fanjnzylber, *La industrialización trunca de América Latina*, Editorial Nueva Imagen, México, 1983.

³ Con el golpe militar de 1964 en Brasil, se abrió un nuevo ciclo de golpes de Estado en América Latina y el establecimiento de lo que Guillermo O'Donnell ha denominado regímenes burocrático-autoritarios (BA), el término

La consolidación del modelo vendría con las transiciones democráticas y la posterior crisis de la deuda de la década de los ochenta, originado a partir de la convergencia de una serie de fenómenos tanto domésticos como internacionales. Con la excepción de Chile, los programas de estabilización ortodoxa y de ajuste estructural fueron llevados a cabo por gobiernos democráticos.

De esta manera, mientras que en la esfera internacional, presenciamos el derrumbe del bloque soviético y la reafirmación del sistema de desarrollo capitalista liderado por Estados Unidos y la emergente Unión Europea; en el ámbito interno se consolidó la denominada “nueva clase capitalista transnacional” que, a diferencia de las burguesías nacidas al amparo del modelo industrializador, no busca más la protección estatal de un mercado interno cautivo, sino que sus intereses se encuentran directamente ligados a los de los centros capitalistas en la medida en que operan en los mismos circuitos financieros del capital. En palabras de Petras:

Ocupando posiciones estratégicas en las finanzas, la industria y el comercio, la nueva clase capitalista transnacional no es simplemente el “comprador” capitalista del pasado, ya que está en condiciones de influenciar los flujos de inversión y comercio dentro del subcontinente y, de esa manera, en posición como para precipitar una “crisis” –hiperinflación, salida de capitales, etc.–, para minar cualquier régimen capitalista que pretenda imponer el viejo modelo nacional-populista.⁴

de *contrainsurgencia* ha sido agregado por el Doctor Lucio Oliver como una característica específica de estos regímenes que, basados en la Doctrina de Seguridad Nacional, llevaron adelante una gran represión en dichas sociedades (Guerra Sucia) lo que constituye sin duda la gran diferencia del burocratismo autoritario de los regímenes democráticos. Conforme a O'Donnell, las BA se trata de dictaduras erigida a partir del convencimiento de las Fuerzas Armadas sobre la necesidad de proteger los “valores occidentales y capitalistas” del país, partiendo de una visión organicista de la sociedad en la que se asumieron como la cabeza de un cuerpo enfermo y sustentada en los postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional sobre el “enemigo interno” y la guerra contra la subversión; que se amalgamó con los postulados económicos liberales de la oligarquía tradicional y su equipo de tecnócratas, “cónsules locales del sistema capitalista mundial, específicamente del capital financiero transnacional”, cuyo diagnóstico y soluciones económicas aparecían simples, ordenadas y eficientes. Su discurso, señala O'Donnell, “tiene la simplicidad del manual; como meta una economía eficiente, basada en ventajas comparativas, con mercados en equilibrio y sin precios artificiales”. La lógica de los militares era la siguiente: la guerra interna contra la subversión y las medidas económicas a favor del liberalismo implicarían un sacrificio necesario y pasajero que garantizarían la existencia misma del Estado y conducirían a sus respectivos Estados a un lugar privilegiado entre las naciones poderosas del mundo. Ver: O'Donnell, Guillermo, “Estado y Alianzas en la Argentina 1956-1976” en: *Desarrollo Económico*. Vol. XVI N° 64. 1977. 43 pp. y O'Donnell, Guillermo “Las Fuerzas Armadas y el Estado Autoritario del Cono Sur de América Latina”, en: Norbert Lechner (comp) *Estado y Política en América Latina*, Editorial Siglo XXI, primera edición, 1981, pp. 199-235.

⁴ James Petras, “El menenismo: El contexto internacional de la década de los 90”, *Revista Herramienta*, 19 de mayo de 2000. Versión electrónica disponible en internet en: www.rebellion.org

Retomando la clasificación clásica establecida por Stephan Haggard y Robert Kaufman⁵ entre el inicio y la consolidación de las reformas económicas, se distinguen dos generaciones de reformas de ajuste estructural.

La primera ola de reformas económicas dichas de “primera generación”, guiadas por el Consenso de Washington⁶, incluyeron la estabilización macroeconómica y la liberalización económica y estuvieron orientadas a la estabilización y apertura económicas como respuesta al fracaso del modelo de desarrollo económico centrado sobre el Estado y políticas de industrialización por sustitución de importaciones, mismas que fueron adoptadas e implementadas a finales de los años ochenta o principios de los años noventa por la mayoría de los países latinoamericanos, con varios grados de intensidad y de éxito.

Sin embargo, el balance de las primeras reformas a mediados de la década de los noventa, mostró que el ajuste estructural, cuyo objetivo último era disminuir el tamaño del Estado, no estaba resolviendo una serie de problemas básicos de los países latinoamericanos, en particular en las áreas sociales en las que los niveles de pobreza, injusticia social y desigualdades en el reparto de la riqueza continuaban inaceptablemente altos.

En consecuencia, se propuso una “segunda generación” de reformas, con la finalidad de reconstruir el aparato estatal y fortalecer las instituciones de gobernabilidad, a partir de una nueva concepción del papel del Estado en el proceso reformador. Los argumentos, especialmente enarbolados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, afirmaban que “el déficit social de las reformas de primera generación debe ser compensado en una segunda etapa de reformas, si no se desea perder el impulso de la primera fase y ganar en estabilidad política”⁷.

⁵ Ver: Stephan Haggard y Robert Kauffman comp., *The Politics of Economic Adjustment*. Princeton University Press, Princeton, 1992.

⁶ Las diez prescripciones políticas del llamado “Consenso de Washington”, se formularon a partir del texto *Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas*, de John Williamson, mismas que definen lo que constituye un buen gobierno y políticas públicas sanas: 1. Disciplina presupuestaria; 2. Cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras). 3. Reforma fiscal encaminada a buscar bases impositivas amplias y tipos marginales moderados; 4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; 5. Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; 6. Liberalización comercial; 7. Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; 8. Privatizaciones; 9. Desregulaciones; 10. Garantía de los derechos de propiedad.

⁷ Según el informe del Banco Mundial de 1997 las prioridades de la reforma para América Latina se agrupan en cinco grandes áreas de políticas, entre las cuales destacan el perfeccionamiento del entorno legal y regulador, el aumento de la calidad de gobernabilidad del sector público y el fortalecimiento fiscal, consideradas como prerequisites para el programa de reformas. Ver: Banco Mundial, *World Development Report 1997: The State in a Changing World*. Nueva York: Oxford University Press para el Banco Mundial, 1997.

Bajo este argumento, la debilidad institucional constituye el cuello de botella para las transformaciones económicas fundamentales, por lo que las reformas de esta segunda fase comprendieron la reforma del sistema fiscal, la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, el mejoramiento del marco regulador para la actividad económica y la privatización, la modernización del poder legislativo, la reforma del sistema judicial, el mejoramiento de los servicios sociales y el mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo del sector privado.⁸

El nuevo discurso, conocido como el Consenso de Santiago articulado durante la Cumbre de las Américas de 1998⁹ se basa en la premisa fundamental de que las instituciones son cruciales para el desarrollo sostenible con equidad y que el Estado debe ser reconstituido para poder desempeñar sus responsabilidades.

El objetivo de estas reformas fue profundizar, completar y corregir las insuficiencias de las reformas de mercado del Consenso de Washington. Por ello el Consenso de Santiago pretende “corregir” las imperfecciones originales del modelo, más que realizar cambios de fondo y recuperar el papel del Estado en la promoción del bienestar colectivo.

En el caso de América Latina las reformas estructurales no han consolidado nuevas economías competitivas, cuyo éxito se refleje en el bienestar de la población. Al contrario, se habla de Estados de incompetencia, en la medida en que se han generado pequeños polos de desarrollo centrados especialmente en las industrias maquiladoras dependientes de insumos extranjeros y productoras de bienes con bajo valor agregado. Estados al borde de la descomposición social, producto de la violencia que genera el círculo perverso de la pobreza, la exclusión y el desempleo. Señala Lucio Oliver:

Los Estados de competencia latinoamericanos no son tales contrariamente, favorecen una pseudo competencia, sumamente precaria y de corto plazo, que no tiene relación con el desarrollo de cadenas productivas internas y de una estructura productiva diversificada y homogénea que es la base de los nuevos Estados de competencia europeos, de Estados Unidos y Japón. Por lo tanto, lo que existe en América Latina es una parodia triste y amarga de los fuertes Estados nacionales de competencia de otras regiones.¹⁰

⁸ Sobre la segunda generación de reformas de ajuste estructural ver: D. Benecke, “Las reformas de segunda generación en América Latina: Desafío para la política económica”, en: *Contribuciones*; núm.4, pp. 21-46, Buenos Aires, Argentina, 2000. M. Naím “Latin America: The Second Stage of Reform”, en: Larry Diamond y Marc F. Plattner (ed), *Economic Reform and Democracy*, Baltimore, The John Hopkins University Press, 1995. y J Williamson, “The Washington Consensus Revisited”, en: Louis Emmerij, (ed.), *Economic and Social Development into the XXI Century*, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington. DC, 1997, pp. 48 -61.

⁹ *Declaración y Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas*, celebrada en Santiago de Chile los días 18 y 19 de abril de 1998. Versiones electrónicas disponibles en internet en la página del Sistema de Información de las Cumbres de las Américas: www.summit-americas.org/defaults.htm

¹⁰ Hirsh , *cit.pos.* Lucio Oliver, *op.cit.*

Así, durante los noventa asistimos al “desmantelamiento” del sector público bajo el credo de que “el mercado debe resolver todo”. Los líderes de América Latina optaron abandonar su responsabilidad y privatizar lo que tradicionalmente había sido parte de la esfera pública y social, desertando “de sus responsabilidades fundamentales en ciertas áreas críticas de su gestión tales como el bienestar general, el desarrollo económico, la seguridad y la administración de justicia”¹¹

De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 2002 el 44% de la población, es decir 221 millones de personas, vivían en condiciones de pobreza, en tanto que 97 millones, cifra correspondiente al 19,4% de los habitantes de la región, vivían en la pobreza extrema o la indigencia. De esta manera, entre 1999 y 2002, el número de pobres se vio incrementado en cerca de 10 millones de personas, de las cuales 8 millones correspondieron a personas en condiciones de extrema pobreza.

La situación más extrema la vivió Argentina, país en el que tan sólo en el Gran Buenos Aires, la pobreza llegó al 41,5%, en el 2002, mientras que la indigencia que se triplicó con creces, pasando del 4,8% en 1999 al 18,6% en el 2002. Asimismo, prevalecía una marcada concentración de la riqueza superior incluso que en otras regiones de menor desarrollo social y con niveles de pobreza más elevados, como el África subsahariana: en promedio el decil más rico en América Latina recibe el 36% del ingreso, aunque en casos como el de Brasil dichos porcentaje supera el 45%.¹²

La globalización ha generado un cúmulo de oportunidades inimaginadas de manera selectiva entre personas, grupos, instituciones, países, naciones y regiones, donde los beneficios generados en los diversos sectores productivos, de servicios, educativos, y comerciales no son accesibles a todos en igualdad de circunstancias, pues el acceso depende de la capacidad para poder competir por ellos.

Es decir, no existe un sentido ético que controle una distribución equitativa de los beneficios generados por el proceso de apertura competitiva. Ello ha resultado en una cada vez mayor diferenciación geopolítica de la pobreza, pues el proceso globalizador ha sido conveniente para unos y perjudicial para otros.

¹¹ Atilio Borón, “América Latina: crisis sin fin o el fin de la crisis”, en: Francisco López Segre, José Luis Grosso, Francisco José Mojica, Axel Didriksson, Manuel Ramiro Muñoz (Coordinadores), *América Latina y el Caribe en el Siglo XXI*. UNAM-Cámara de Diputados, 2004. p. 534.

¹² CEPAL, *Panorama Social de América Latina y el Caribe*, CEPAL, Santiago de Chile, 2005.

La liberalización y la internacionalización de los mercados financieros han modificado la naturaleza de los riesgos económicos que enfrentan los países. La desregulación de las corrientes financieras ha hecho a los países cada vez más vulnerables a acciones especulativas de las entidades privadas, nacionales o extranjeras. Asimismo, asistimos al desfonde del Estado como regulador e integrador de la sociedad.

En América Latina la salud, la educación, la vivienda se privatizaron y dejaron de ser bienes públicos para convertirse en mercancías,¹³ fuera del alcance de la mayoría de la población que vive en condiciones de pobreza. La miseria y descomposición social que enfrentan nuestros países desmitifican la afirmación liberal sobre las bondades del mercado. Al contrario, cada vez queda más claro que el mercado por sí sólo no genera ni sustenta el orden social y que, aún bajo el modelo neoliberal, ha sido necesario para permitir la reproducción del modelo y garantizar la rentabilidad al capital. Por ello, el debate no se centra en cuánto mercado y cuánto Estado sino en qué tipo de Estado es necesario para regular al mercado y paliar las distorsiones que ha generado.

Los límites de la democracia electoral

En América Latina las transiciones democráticas mostraron prontamente sus propias limitaciones: la debilidad de las instituciones, el resurgimiento de los partidos políticos tradicionales con sus mecanismos de cooptación y corrupción, al lado de los desequilibrios económicos heredados de los regímenes autoritarios y los efectos de las medidas neoliberales de control macroeconómico dejaron muy pronto huecas frases como el que “con la democracia se come, se cura y se educa”.¹⁴

Así, en su mayoría las transiciones se redujeron a la simple sustitución del poder militar por el civil, que continuó resguardando los intereses de la oligarquía nacional, y la cada vez mayor concentración de poder en el Ejecutivo. Por ello, la realidad latinoamericana nos demuestra que la democracia no es una condición suficiente para llegar al pleno desarrollo de las naciones, y que falta mucho por trabajar para consolidar las instituciones, las prácticas y la cultura democrática.

¹³ Ver: Carlos Vilas, “Desigualdad después del ajuste: la política social entre el Estado y el mercado”, en: Carlos Vilas, (Coordinador), *Estado y Políticas Sociales después del ajuste. Debates y Alternativas*, UNAM-Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1995, p. 22

¹⁴ Raúl Alfonsín, *cit pos* Daniel Munchik *Argentina modelo, de la furia a la resignación. Economía y Política entre 1973 y 1998*, Editorial Manantial, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 148

Resultado de la debilidad institucional y de la permanencia de las viejas prácticas y de los pésimos resultados económicos, la democracia es aún débil e incluso cuestionada, al traer aparejados el descrédito de los partidos políticos, la corrupción y clientelismo de la clase dirigente y la polarización social que alimenta el círculo vicioso entre pobreza y violencia.

Los altos déficits en materia de ciudadanía (civil, social y política) son muestra de que la democracia en América Latina está moldeada en los viejos vicios autoritarios y personalistas, lo que permitió las reformas económicas y ha cobijado el saqueo de nuestros países. Siguiendo a Francisco Panizza:

En América Latina, la “nueva economía” no ha llevado a la desaparición de la “vieja política” basada en el personalismo, el clientelismo y la corrupción, y es poco probable que lo haga en un futuro previsible. Más aún es posible sostener que, lejos de ser un obstáculo para la modernización económica, en determinadas circunstancias y bajo ciertos límites la vieja política ha sido un instrumento útil para asegurar importantes reformas económicas. Como consecuencia de este proceso, la nueva economía de libre comercio, privatizaciones y otras reformas estructurales ha sido moldeada por la vieja política, la cual, por su parte, se ha adaptado a la nueva economía.¹⁵

En efecto, durante la década de los noventa esta vieja política basada en el clientelismo y la corrupción se engarzó perfectamente con la concentración del poder en los presidentes de la región que pusieron en marcha las reformas de primera generación¹⁶ en forma prácticamente aislada del resto del sistema político vía la utilización de los “decretos de necesidad y urgencia”, siendo los casos de Perú con Fujimori y Argentina bajo el gobierno de Menem¹⁷ los más representativos.

Situación que configura la radiografía del *hiper*-presidencialismo o democracias delegativas¹⁸ “basadas en la premisa de que quien gana la elección presidencial

¹⁵ Francisco Panizza, “Más allá de la ‘democracia delegativa’. La ‘vieja política’ y la ‘nueva economía’ en América Latina”, en: Isidoro Cheresky e Inés Pousadela, *Política e Instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas*, Paidós, Argentina, 2001, p. 160

¹⁶ De acuerdo a la clasificación establecida por Stephan Haggard y Robert Kaufman (*The Politics of Economic Adjustment*, Princeton University Press, Princeton, 1992).

¹⁷ Cabe señalar que en el caso de Argentina, durante su segundo año de gobierno, el presidente Néstor Kirchner firmó 73 decretos de necesidad y urgencia, uno cada cinco días, superando de esta manera al gobierno de Carlos Menem.

¹⁸ Ver: Marcelo Cavarozzi, *Autoritarismo y Democracia*, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina, 2002, 183 pp. y Guillermo O' Donnell, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencia a países poscomunistas”, en: *Desarrollo Económico* núm. 130, vol.3, Buenos Aires, Argentina, 1993 y Guillermo O'Donnell, “¿Democracia delegativa?”, en: Guillermo O'Donnell, *Contrapuntos, ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1997.

queda facultado para hacer lo que mejor le convenga, limitado sólo por las duras realidades de las relaciones de poder existentes y por el poder temporal del ejercicio de gobierno. El presidente es la encarnación del interés nacional, el cual en tanto presidente, es de su incumbencia definir”¹⁹

Una *democracia restringida* cuya principal característica es el manejo tecnocrático de las políticas públicas combinado con estilos populistas que, se supone, garantizarían la adhesión popular²⁰ pero cuyo resultado real es el descrédito y el vaciamiento de la democracia, traducida en creciente distanciamiento de las élites políticas de la mayoría de la población y la despoltización de la ciudadanía.

Se configura de esta forma un modelo en el que convive la exclusión económica con límites a la participación política, vía la democracia electoral.

Es incuestionable que los malos resultados económicos que han tenido las políticas neoliberales en los países latinoamericanos han repercutido en la credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas y en las dificultades de los regímenes para generar condiciones de gobernabilidad, especialmente en circunstancias de crisis. De hecho, el problema fundamental de la gobernabilidad es que en América Latina cada vez más la crisis deja de ser una excepción para convertirse en regla.

Como señala Guillermo O’Donnell, cada país de la región tiene sus peculiaridades, pero en casi todos hay una amplia proporción de la población que se encuentra por debajo de un piso mínimo de desarrollo humano, en términos no sólo de bienes materiales y de acceso a servicios públicos, sino también de derechos civiles básicos. Los miembros de esta población son pobres tanto material como legalmente.²¹

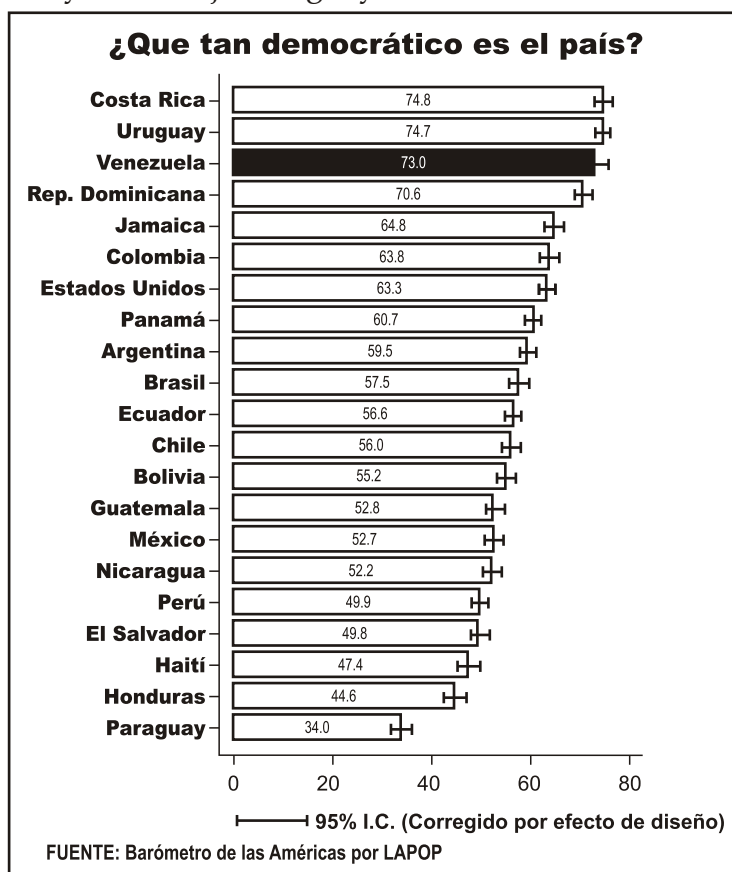
¹⁹ Ver: Guillermo O’Donnell, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una perspectiva latinoamericana con referencia a países poscomunistas”, en: *Desarrollo Económico* núm. 130, vol.3, Buenos Aires, Argentina, 1993. Versión electrónica disponible en : www.educ.ar Las democracias delegativas, se caracterizan además por que los líderes cuentan con la legalidad/legitimidad de haber llegado al poder mediante elecciones, en las que obtienen el triunfo por su imagen sobre la de los partidos. Asimismo, se llevan adelante cambios constitucionales, introduciendo el principio de la reelección, mientras que el presidente y su equipo “son el principio y fin de la política” asumiendo la responsabilidad de sus decisiones. El uso de los decretos debilita las otras instituciones del poder, alterando los principios constitucionales y del sistema de control mutuo de los poderes. Así, por ejemplo, al tener la posibilidad de nombrar jueces “amigos” del presidente, los mandatarios latinoamericanos convirtieron a las Cortes Supremas en un eslabón más de la corrupción del régimen, como sucedió en Argentina y Perú.

²⁰ Ver: Norbert Lechner, *Estado y Sociedad en una perspectiva democrática*. Sitio web Insumisos Latinoamericanos.

²¹ Guillermo O’Donnell, “Notas sobre la democracia en América Latina”, en: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y de ciudadanos. El debate conceptual sobre la democracia*, PNUD Taurus- Alfaguara, S.A., Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 40

Así, resulta alarmante que, debido a las precarias condiciones económicas de la mayoría de la población, se ha experimentado un desencanto hacia la democracia. El informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) *La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y de ciudadanos. El debate conceptual sobre la democracia*, revela que más de la mitad de los latinoamericanos (54,7%) apoyaría un régimen autoritario si éste le solucionara sus problemas económicos, debido a que para un 56% de los encuestados el desarrollo económico es más importante que la democracia.²²

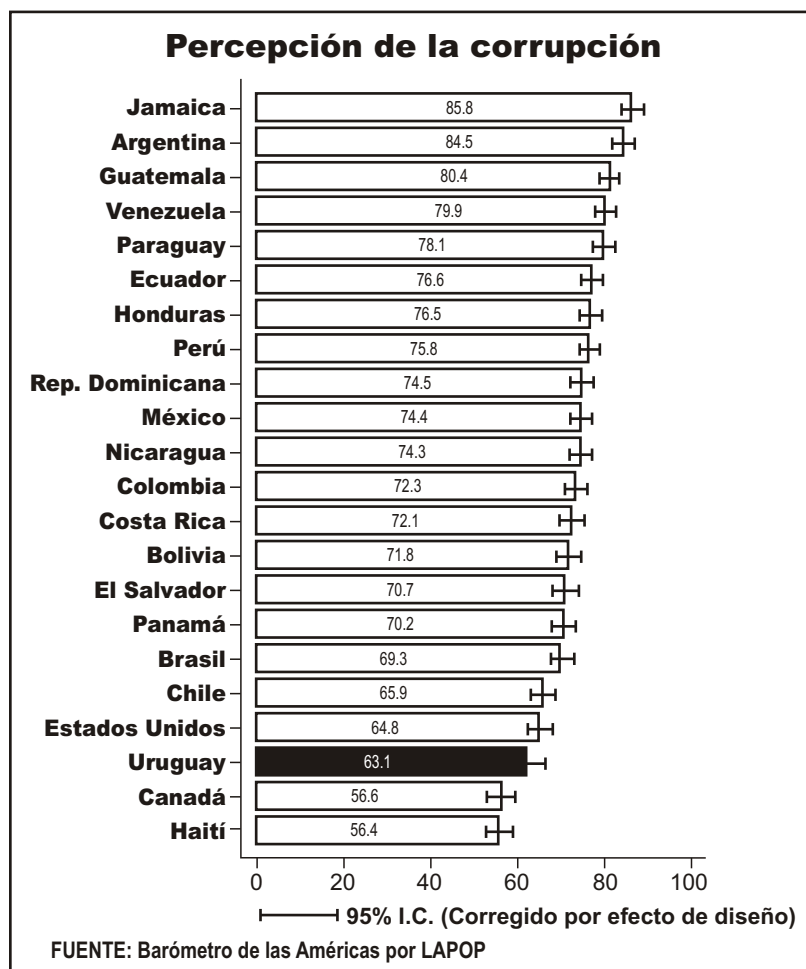
Mientras que en la encuesta realizada por *Latin American Public Opinion Project*, (LAPOP)²³ en 2008 se revelan datos importantes en cuanto a las percepciones de los latinoamericanos en cuanto a la democracia en sus respectivos gobiernos: Costa Rica considera tener un gobierno muy democrático en un 74.8 % seguido por Uruguay con 74.7 %, Venezuela con 73 %, Argentina con 59.5 %, Brasil con 57.5 %, México con 52.7 % y el más bajo Paraguay con 34 %.



²² Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y de ciudadanos*. *op.cit.*

²³ Latin American Public Opinion Project, "Cultura política, gobernabilidad y democracia en América Latina", 2008.

Y es que si bien el ascenso de los líderes de la izquierda parece ser la nueva tendencia en la región, no podemos descartar que, resultado de la desesperación social que han engendrado las condiciones de pobreza, exclusión e inseguridad, también han sido electos líderes de derecha como es el caso de Álvaro Uribe en Colombia, que en 2008 se erigió como el mandatario mejor evaluado de la región con 78 % de aprobación, resultado de los avances en contra del narcotráfico y la guerrilla en el país.²⁴



²⁴ Álvaro Uribe, Presidente de Colombia, al cumplir 64 meses de gestión apareció en primera posición con 78 % de aprobación. Consulta Mitofsky, "Sondeo sobre popularidad de dirigentes políticos", primer trimestre de 2008, versión electrónica disponible en:

http://www.infolatam.com/entrada/mitofsky_sondeo_sobre_popularidad_de_dir-6802.html, consultado el 25 de enero de 2009.

Respecto a la percepción de los ciudadanos sobre el tema de la corrupción, según datos de LAPOP, la tendencia es muy similar entre los países latinoamericanos. El país que considera que su gobierno es muy corrupto es Jamaica con el 85 % de la población, seguido por Argentina con el 84.5%.

Esta breve revisión de las democracias latinoamericanas obliga a reflexionar en torno a la importancia de retomar el camino de la transición y consolidación democrática.

En escenarios donde la exclusión social y la inestabilidad institucional parecen ser una regla, resulta indispensable sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo en el que todos los actores de nuestras sociedades renueven el compromiso con el bienestar común, el fortalecimiento del Estado, un modelo socialmente incluyente y una democracia ciudadana. En otro escenario, países como México, por ejemplo, pueden correr el riesgo de regresiones autoritarias.

El ascenso de los gobiernos de izquierda y los movimientos sociales en la región se da en este marco del fracaso del modelo económico neoliberal y democracias electorales.

Los movimientos sociales y la “nueva izquierda”

En el contexto de las crisis sociales e institucionales que enfrenta la región, se han generado una serie de movimientos sociales²⁵ como los *piqueteros* en Argentina, los *sin tierra* en Brasil, los *cocaleros* en Bolivia y los *mapuches* en Chile, que anuncian el resurgimiento de la sociedad civil, de la participación de nuestras sociedades en aras de exigir se garanticen derechos mínimos como el trabajo, la salud, la vivienda.

²⁵ Un movimiento social, en general, cuestiona el modo de apropiación social de los recursos y las pautas culturales que le imponen a la sociedad determinados sectores o minorías, no se reduce a la defensa de los intereses particulares de los dominados, en cambio, prioriza un principio de igualdad, en la medida que busca abolir una relación de dominación; crear una sociedad que rompa con las formas antiguas de producción gestión y jerarquía. Es por eso, que quienes se involucran en un movimiento social lo hacen para poner fin a lo que consideran intolerable, participando en una acción colectiva. Cfr. Alan Touraine, *The voice and the eye: an analysis of social movements*, Cambridge University, 1981, p. 12. Por su parte, Alberto Melucci y Enrique Laraña explican los movimientos sociales como una forma de acción colectiva que integra distintos elementos: apelan a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; suponen la presencia de conflicto entre dos o más actores que compiten por el control sobre los recursos, presumen además, una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en el que se desarrolla una acción; tienen capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la sociedad. Cfr. Enrique Laraña, (eds) *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994.

Las clases medias, los estudiantes, la sociedad en su conjunto está saliendo a las calles de las metrópolis latinoamericanas para protestar contra los nuevos ajustes y para exigir la atención de las necesidades sociales.

Al mismo tiempo, presenciamos una nueva ola de ascenso de los partidos de izquierda al poder: desde la elección de Chávez en Venezuela a finales de la década de los noventa hasta el triunfo de Lula en Brasil en 2002, la elección de Tabaré Vázquez en octubre de 2004 en Uruguay, el triunfo de Michelle Bachelet en 2006, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua en 2007.

A la par de las transformaciones del sistema internacional y de los cambios en América Latina, la izquierda se ha transformado y reinventado adaptándose a las nuevas realidades. A partir de los años noventa, la izquierda en latinoamericana fue transitando a lo que conocemos hoy como la “nueva izquierda”, pasando de la vía armada a la contienda electoral y a las manifestaciones populares.

Una izquierda diversa que se conforma por distintas organizaciones: partidos comunistas (conformados para defender la vía pacífica al poder en la segunda década del siglo pasado); la izquierda nacionalista o popular (cuya referencia son figuras como Perón en Argentina, Vargas en Brasil y Cárdenas en México); la izquierda surgida de los movimientos guerrilleros y hoy transformada en partidos políticos; algunos partidos reformistas y la izquierda social (que implica la participación de movimientos rurales y urbanos).²⁶

La emergencia de la “nueva izquierda” en la región latinoamericana se explica a partir de cuatro elementos:

1. El asenso del neoliberalismo y los magros resultados de las políticas de ajuste, que incrementaron el descontento social. Con la multiplicación de las crisis económicas y los escándalos de corrupción en toda la región, surgieron o se fortalecieron los movimientos sociales y partidos de izquierda opuestos al neoliberalismo.

Así, por ejemplo, la crisis Argentina de diciembre de 2001 constituyó la cruda muestra de los límites del modelo neoliberal en la región, abriendo paso al gobierno de centro izquierda de Kirchner; mientras que los efectos negativos de las reformas bolivianas y ecuatorianas de los noventa dispararon la protesta

²⁶ Patrick Barrett (et.al), “Utopia reborn? Introduction to the study of the new Latin American left”, en: Patrick Barrett, César Rodríguez-Garavito & Daniel Chavez (comps.) *The New Latin American Left*, Pluto Press, Londres, Reino Unido, 2008.

social de campesinos, indígenas y trabajadores urbanos, con el ascenso de poderosos movimientos sociales y de partidos de izquierda.

2. La fragilidad de la democracia electoral, el descrédito y las crisis internas de los partidos tradicionales, que crearon oportunidades políticas para las nuevas formaciones de izquierda. Tras la transición a la democracia, quedó en evidencia la incapacidad o falta de voluntad política de la mayoría de los partidos políticos tradicionales de la región de convertir la voluntad popular en políticas de gobierno y de construir sociedades más equitativas.
3. El surgimiento de nuevos actores políticos (como los movimientos indígenas y campesinos, los desempleados, los movimientos feministas, entre otros) que se suman al papel tradicional de los sindicatos en cuanto a sus demandas sociales.
4. La revitalización de la izquierda a nivel internacional, desde las protestas en Seattle en 1999 contra la Organización Mundial del Comercio y la conformación del movimiento "altermundista"²⁷.

El papel de la sociedad civil es fundamental para la "nueva izquierda" que la considera "el centro de resistencia frente a la derecha", por lo que existe multiplicidad en las bases sociales y en la agenda política de estos partidos. Al tiempo que destaca su carácter reformista (en tanto que los programas económicos combinan el mercado con mayor o menor intervención estatal y políticas sociales) y el énfasis en la profundización de la democracia (a través de la participación directa de la ciudadanía).

Esta "nueva izquierda" es también de carácter diverso en la región: puede asumirse tan radical como el chavismo en Venezuela o mucho más moderada o progresista como en los casos de Brasil y Argentina.

En el caso de Venezuela, luego de un fallido golpe de Estado, Chávez fue electo presidente en 1998 por una amplia mayoría empobrecida y que no se sentía representada por los partidos tradicionales del país: Acción Democrática y COPEI. Su carisma, su discurso abiertamente antiimperialista y crítico del modelo económico neoliberal, a la par del uso recurrente de la figura e ideología de Bolívar, permitieron a Chávez ganar la elección de 1998 y emprender lo que él mismo ha denominado "una Revolución radical e impulsora de cambios".

²⁷ Atilio Borón, "Promises and Challenges. The Latin American Left and the Start of the Twenty-first Century", en: Patrick Barrett, *et. al, op.cit.* p. 236-238

El régimen de Chávez se caracteriza por la concentración del poder en la figura presidencial, como representante de las mayorías excluidas, al tiempo que las fuerzas armadas y sus seguidores agrupados en los “círculos bolivarianos” adquieren gran relevancia en la gestión del gobierno. En materia económica, destaca su discurso sobre el “combate al neoliberalismo salvaje y la búsqueda de un capitalismo más humano” y sobre la construcción del “socialismo del siglo XXI”²⁸; mientras que en política exterior su gobierno propone una integración alternativa de América Latina a partir de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el rechazo abierto a la propuesta de Washington sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Por ello, entre sus seguidores se afirma que éste gobierno representa el inicio de la democracia, tras décadas de hegemonía de los partidos tradicionales; mientras que para sus detractores se trata de un gobierno claramente autoritario.

Este modelo radical ha servido de inspiración para algunos otros líderes de la región. En ningún otro país ha tenido el mismo éxito debido a las condiciones particulares con las que se vive en Venezuela. Tal es el caso de la ventaja que le brinda a éste la posesión del petróleo, considerando los elevados precios que ha alcanzado el crudo. No obstante, el resto de los países de la región no son tan afortunados.²⁹

Entre los países que han seguido este modelo radical de democracia, se puede incluir a Evo Morales (Bolivia), a Rafael Correa (Ecuador) y, aunque retóricamente más moderado, Daniel Ortega (Nicaragua). Por supuesto, Fidel Castro es considerado el decano de los movimientos revolucionarios en toda América Latina.³⁰

La otra izquierda vigente en la región latinoamericana es esencialmente moderada, denominada también progresista o socialdemócrata, comprometida con el mantenimiento de las instituciones liberales y democráticas. Asimismo, promueven políticas sociales a favor de la redistribución del ingreso, sin que ello signifique un cambio radical respecto al modelo económico neoliberal. En materia de política exterior, estos gobiernos se han caracterizado por el impulso a una renovada integración latinoamericana, generando además posiciones conjuntas frente a los organismos financieros internacionales a favor de cambios al modelo económico global.

²⁸ Cfr. Edgardo Lander y Pablo Navarrete, *La Política Económica de la Izquierda Latinoamericana en el Gobierno de Venezuela*, Havens Center, Rosa Luxemburg Stiftung y Transnational Institute, Amsterdam Países Bajos, 2007. Versión electrónica disponible en internet en: <http://www.tni.org/> Consultado el 06 de diciembre de 2008.

²⁹ John Peeler, *Building democracy in Latin América*, 3a edición, Rienner, Gran Bretaña, 2009, p. 175. p. 173.

³⁰ *Ídem.* p. 174.

Los ejemplos más importantes de esta izquierda son Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile; Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay; así como Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina.

En el caso de México, el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador superó las aspiraciones presidenciales del candidato oficial de la Alianza por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia) y se ha convertido en la referencia inmediata del rechazo al modelo neoliberal aplicado en el país.

El movimiento encabezado por AMLO fue atacado no sólo por el partido de derecha sino por el presidente en turno, los medios de comunicación y la Iglesia. Con estos actos se demostró que el sentimiento “anti-populista” que ellos estaban creando, estaba sustituyendo el sentimiento “anticomunista” de la época de la Guerra Fría. La guerra por parte de las televisoras en contra de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, se parecía a las propagandas nazis de Joseph Goebbels.³¹

Para muchos observadores, Andrés Manuel López Obrador es comparable con Hugo Chávez en la medida en que se trata de un carismático líder popular comprometido a ayudar a los pobres. Sin embargo, su movimiento no es catalogado como parte de la izquierda radical.³²

³¹Patrik Barrett; Daniel Chávez; Rodríguez-Garavito, *Op. Cit.*, p. 201.

³²John Peeler, *op.cit.* p. 175.

Conclusiones

Sin lugar a dudas, el modelo económico neoliberal ha mostrado sus limitaciones no sólo en América Latina, sino alrededor del mundo. La crisis económica global, cuyo epicentro fue Estados Unidos y no algún país en desarrollo, es muestra clara de que los mercados necesitan de un Estado que los regule y que, además, cumpla con sus funciones de bienestar social.

A cifras del 2007, la incidencia de la pobreza alcanza a 184 millones de personas, que equivale al 34.1% de la población de la región. De este porcentaje, quienes viven en condiciones de pobreza extrema o indigencia representan un 12.6%, es decir 68 millones de indigentes. De acuerdo con la CEPAL, los niveles de pobreza en la región se han reducido de forma considerable a partir del año 2004; destacando los avances en Bolivia y Brasil, seguidos por Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador y Honduras.³³

Respecto a la concentración de la riqueza, América Latina se ha destacado por ser la región más desigual del mundo: 40% de los hogares ubicados en la parte inferior de la distribución capta en promedio un 15% del ingreso total, este indicador alcanza sus valores más bajos en Bolivia, Honduras y República Dominicana. En contraste, el 10% más rico de los hogares concentra en promedio el 35% de los ingresos totales, alcanzando el 40% en países como Brasil y Colombia.

El modelo neoliberal está claramente rebasado por la realidad y es necesario replantear el paradigma de desarrollo económico, centrando la atención en la importancia de la inclusión social y de la lucha contra la desigualdad como sustento de un Estado democrático. Al mismo tiempo, la gobernabilidad democrática está inexorablemente ligada al ejercicio de los derechos económicos, políticos y sociales de la población. Por ello, la construcción de la democracia ciudadana es una tarea irrenunciable para la clase política y las sociedades latinoamericanas.

La combinación entre exclusión social, falta de oportunidades, violencia social, incremento de las actividades del crimen organizado y desgaste de las estructuras políticas tradicionales; han ocasionado severas crisis políticas y de gobernabilidad en la región. Al tiempo que se han abierto las posibilidades para el surgimiento o consolidación de los partidos de izquierda y de los movimientos sociales.

³³ CEPAL, *Panorama Social de América Latina* Santiago de Chile, 2008.

La nueva izquierda latinoamericana se caracteriza por su carácter renovador, por la unificación del movimiento social con el partido político, por el impulso a políticas económicas centradas en el bienestar social y por recuperar el papel del Estado como rector del sistema económico y promotor del desarrollo social. Se trata pues, de una alternativa al modelo neoliberal y a la democracia restringida, que predominaron en la región tras las transiciones a la democracia.

Independientemente del carácter que esta nueva izquierda ha adquirido (radical, sociademócrata, moderada, de centro) y de los adjetivos que se le puedan dar (populista, progresista, etcétera) el compromiso de estos gobiernos con la equidad social y con la construcción de modelos alternativos es claro. Así, por ejemplo en materia de concentración de la riqueza ocho de los nueve países que han mostrado una importante reducción de la misma están gobernados por la izquierda: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela; en tanto que El Salvador está gobernado por la derecha.

De cara a los procesos electorales que América Latina enfrentará en el año 2009, la izquierda tendrá la oportunidad de refrendarse en el poder o llegar a él. A una década de su ascenso al poder en la región (con el triunfo de Chávez en 1998) la izquierda latinoamericana enfrenta diversos desafíos: a) promover la ciudadanía de la política en aras de construir la democracia ciudadana; b) la transformación profunda del modelo económico; c) una política de bienestar social para procurar la inclusión de los sectores más marginados y la cohesión social; y d) constituirse en opciones viables dando garantías a todos los sectores sociales.